JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno

RADICADO	05001 31 03 10 2021 00123 00
ASUNTO	Rechaza demanda por no subsanar en debida forma

Dentro del término establecido para el efecto, la parte demandante presentó escrito de subsanación (Archivo 04 C.1). Sin embargo, y una vez revisado dicho escrito, el Juzgado concluye que la parte actora no cumplió cabalmente con las exigencias realizadas a través del proveído del **3 de mayo de 2021**, por lo siguiente:

En los numerales **5º**, **13º** y **14º** del auto inadmisorio, se solicitó claridad sobre los fundamentos fácticos de las pretensiones elevadas por la señora Melba Montoya, respecto al lucro cesante -consolidado y futuro- y al daño emergente. En dichos numerales se insistió en la necesidad de que las sumas de dinero reclamadas en las peticiones de la demanda también fuesen expresadas en los hechos y, por tanto, fuesen debidamente sustentadas desde el punto de vista fáctico. De igual modo, se hizo hincapié en la necesidad de que todo lo deprecado en las pretensiones guardase coherencia con lo indicado en los hechos de la demanda y en el juramento estimatorio respectivo.

No obstante, en el nuevo escrito de demanda que fue presentado como forma de subsanación (fls. 301-337 Archivo 04 C.1), se observa que la pretensión 6ª, referente a los perjuicios patrimoniales deprecados por la señora Melba Montoya, no fue debidamente sustentada, ya que en el hecho vigésimo segundo simplemente se aludió a la labor que desempeñaba la demandante para la época del siniestro y al salario recibido como contraprestación de tal labor, pero, de ninguna manera, se aludió al **tiempo específico o las fechas precisas en que, presuntamente, se vio interrumpida la percepción de dicho salario, ni la forma en que ello aconteció, esto es, no se indicó si ello se dio de forma parcial o total; como tampoco se aclaró la razón por la cual ello aconteció, es decir, no se hizo alusión a la existencia de una incapacidad médico legal parcial y/o de una pérdida de capacidad laboral; ni, mucho menos, a su porcentaje.**

Así mismo, se observa que en el precitado hecho vigésimo segundo se aludió a la suma de \$ **\$11'723.383.42**, sin aclararse a qué tipo de lucro cesante correspondió ese valor, esto es, si atañía al consolidado o al futuro. La parte no especificó la calidad del supuesto perjuicio, ni aclaró, como ya se anotó, si la persona había tenido una pérdida de capacidad laboral transitoria o permanente ni sustentó su porcentaje.

En ese orden, también se constata que en los hechos de la demanda tampoco se aludió al sustento fáctico de la suma reclamada en la pretensión 6ª, por concepto de lucro cesante futuro, es decir, no se fundamentó fácticamente el valor de \$ **\$76'693.368,61**.

Igual situación se presentó con relación al daño emergente solicitado por la precitada señora, toda vez que en el acápite de los hechos, en modo alguno, se hizo alusión expresa a la causación del daño emergente referenciado en el apartado de pretensiones, ni a las condiciones de modo, tiempo y lugar en que éste se configuró; y, menos aún, se señaló el valor monetario en que éste fue tasado. Es mas, nótese cómo desde la misma

pretensión 6ª no se califica jurídicamente dicho daño, pues la parte actora se limitó a pedir el reconocimiento de \$ 20'092. 000.00, por concepto de daño material, sin que – se itera- clasificara debidamente éste daño que, valga aclarar, solo fue mencionado en el juramento estimatorio -no en los hechos de la demanda-.

Por lo anterior, las exigencias hechas en los numerales 5º, 13º y 14º del auto inadmisorio no fueron observadas.

Por otro lado, se avizora que en el numeral 7º de la providencia inadmisoria se solicitó claridad sobre los parámetros que desde la normativa civil soportan las pretensiones relativas a los prejuicios extrapatrimoniales.

Sin embargo, la parte demandante, en las pretensiones décimo segunda y décimo tercera, así como en los hechos décimo primero, décimo cuarto, acudió al fundamento legal contemplado en el Art. 97 del Código Penal, lo cual, sin lugar a dudas, genera confusión para el Juzgado y no obedece a la técnica jurídica y procesal correspondiente, razón por la cual también se entiende como inobservada la exigencia efectuada en el precitado numeral 7º.

Finalmente, se verifica que en el numeral 8º del proveído inadmisorio, se solicitó la presentación del correspondiente juramento estimatorio, en los términos contemplados por el artículo 206 del C.G.P., para lo cual resultaba menester que la parte pretendiente señalase con nitidez la forma y las fórmulas aritméticas utilizadas para obtener las sumas de dinero deprecadas.

Empero, en el juramento estimatorio allegado la parte activa no indicó o hizo alusión a las fórmulas aritméticas que se usaron para hallar el resultado deprecado por concepto del daño emergente referente a Melba Montoya y Juan Esteban Penabazante.

Ahora, con relación a la señora Melba Montoya, tampoco se expuso de forma puntual en qué consistió dicho daño, pues la parte actora aludió de forma superficial y genérica a la existencia de gastos de “Transporte, movilización, honorarios enfermera y otros”, sin otorgarle a cada uno de ellos un valor determinado y, por ende, sin ofrecer la claridad sobre la forma en que se logró establecer que todos esos gastos ascendieron a un total de \$ 20'092. 000.00

Desde el anterior contexto, y como se advirtió con antelación, se colige que la parte actora no cumplió a cabalidad con las directrices prescritas por el Juzgado, toda vez que no brindó la claridad, precisión y determinación exigida. En este punto, se pone de presente que el **Art. 82 del C.G.P. ordena, en sus numerales 4º y 5º, que las pretensiones sean expresadas de forma precisa y clara; y que los hechos que fundamentan éstas sean expuestos de forma determinada, respectivamente.**

Ahora bien, en cuanto a la precisión y claridad que se demanda de las pretensiones, se tiene que, a la luz de la RAE, el vocablo **preciso** denota aquello que es “*Perceptible de manera clara y nítida*”; y que el concepto de **claro** atañe a “*aquello que es ‘Inteligible, fácil de comprender’*”. Por su parte, y respecto a la determinación que se deprecia de los hechos, se observa que, acorde a la RAE, el verbo **determinar** alude a la acción de “*Señalar o indicar algo con claridad o exactitud*”.

Los anteriores elementos también se tornan necesarios para la existencia de la **perfecta individualización de lo pretendido**; concepto procesal que “...exige que el actor, al deducir el *petitum*, se apoye en una calificación jurídica precisa”¹, y que encuentra respaldo, desde lo procesal, como quiera que con él se propende honrar el presupuesto procesal de demanda en forma; y, a su vez, se le garantiza al extremo pasivo un conocimiento claro sobre el efecto jurídico perseguido por su opositor.

Se hace énfasis en que la formulación de pretensiones con basamento fáctico y jurídico en términos claros, atiende a la debida técnica con la cual se debe erigir el *petitum*. En ese sentido, la individualización de lo pretendido exige que lo pedido tenga un asidero que contemple los efectos jurídicos que se preconizan ajustarse a la causa *petendi*, pues de esta labor intelectual se extrae la tipicidad de la pretensión.

Así las cosas, y al no cumplirse en debida forma las exigencias prescritas en el auto inadmisorio de la demanda, las cuales, se hicieron con fundamento en lo establecido en el Art. 82 del C.G.P., y en atención a la figura de la perfecta individualización de lo pretendido, el el Juzgado,

RESUELVE,

Primero: Rechazar la demanda de la referencia, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. No hay lugar a devolver anexos o a realizar desgloses, toda vez que la demanda fue presentada de forma virtual.

NOTIFIQUESE

**ALVARO ORDOÑEZ GUZMAN
JUEZ**

4

Firmado Por:

**ALVARO EDUARDO ORDOÑEZ GUZMAN
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 019 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

6367b35764f120400341f6fa9466c3fd8dcdedaeda9197265eee43299a3c77e0

Documento generado en 26/05/2021 10:38:45 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

¹ QUINTERO, PRIETO. Beatriz y Eugenio. Teoría General del Derecho Procesal. Cuarta Edición. Editorial TEMIS, Págs. 432-433